

Cuarenta años de democracia abrumados por una economía declinante

GUILLERMO ROZENWURCEL

Profesor titular UBA y UNSAM.

Investigador Principal del CONICET.

ESTUDIOS SOCIALES

[Número especial • 2023]

Voces plurales para pensar la
democracia argentina (1983–2023)

Estudios Sociales. Revista Universitaria Semestral
Universidad Nacional del Litoral, Argentina

ISSNe: 2250-6950

estudiossociales@unl.edu.ar

DOI: 10.14409/es.2023.64.e0062

Esta obra está bajo una Licencia Creative
Commons Atribución- NoComercial-
CompartirIgual 4.0 Internacional.



INTRODUCCIÓN

La presidencia de Raúl Alfonsín interrumpió el péndulo de gobiernos civiles y militares y la crisis de legitimidad de las administraciones que se sucedieron entre 1930 y 1983. Los cuarenta años de democracia que se extendieron desde entonces, pese a sus numerosos y severos conflictos políticos, económicos y sociales, revelan una legitimidad indiscutida. «Nunca más» el país sucumbió a la violencia política y los golpes de Estado.

El alfonsinismo se propuso instaurar un régimen democrático que fuera más allá de garantizar elecciones competitivas y transparentes y la posible alternancia entre gobiernos de diferente signo político. El nuevo régimen debía, además, reducir el poder corporativo que limitaba la autonomía de las instituciones democráticas.

Ese proyecto y su corolario, que bajo ese régimen sería posible el desarrollo sostenible e inclusivo, no encontró apoyo en el peronismo de la época (cuya tentativa de «renovación» se diluyó rápidamente) y sigue inconcluso. Pero, a pesar de todo, la democracia perdura y nadie la cuestiona.

A continuación presentamos sintéticamente algunas ideas sobre el desempeño económico durante el período de

sustitución de importaciones, en el marco del así llamado empate hegemónico (parte 1), sobre la relación entre el régimen democrático y la tendencia a la declinación social y económica que transcurre en paralelo (parte 2), sobre las características del ciclo *crash and go* propias de ese período de declinación (parte 3), sobre las interacciones entre la fragmentación social, el nuevo tipo de empate multisectorial que le es propio y las panaceas simplistas con que se buscó revertir la declinación (parte 4) y, por último, sobre los desafíos a enfrentar a futuro para revertir la declinación y empezar a transitar un proceso de estabilización y desarrollo sostenible e inclusivo (parte 5). Al final se exponen algunas reflexiones.

SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES Y EMPATE «HEGEMÓNICO»

Agotado el modelo agroexportador por las secuelas de la gran depresión del '30 y la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos civiles y militares que se sucedieron entre 1945 y 1975 hicieron posible, pese a su falta de legitimidad política, construir una sociedad más homogénea, integrada y equitativa que las del resto de América Latina, en el marco de un crecimiento económico razonable.¹ En 1983, el contexto socioeconómico en que se inauguraba la nueva época era muy diferente del de aquel período.

Hasta mediados de los años 70 el país contaba con una amplia provisión de bienes públicos y una extendida red

1\ Estos primeros párrafos se basan en los que pueden leerse al comienzo del artículo de Natalio Botana «40 años de democracia. Un sistema con voluntad de duración», publicado en *La Nación* del 17 de junio de 2023.

de protección social, asentadas en un modelo de desarrollo centrado en el Estado como promotor de la industrialización sustitutiva de importaciones

No obstante, la brecha entre las expectativas subjetivas —asentadas en el mito del país rico— y las posibilidades objetivas de una economía de baja productividad fue creciendo al compás del conflicto distributivo entre corporaciones que expresaban las demandas de diferentes actores sociales.

Un empate «hegemónico» entre las corporaciones empresariales de un lado y los sindicatos de trabajadores del otro, ambos con capacidad para vetar las demandas de su adversario pero no de imponer sus propios intereses, tendió a impedir una resolución más o menos estable de ese conflicto.² La volatilidad política y la inestabilidad económica fueron las consecuencias de ese empate.

De cualquier modo, el modelo sustitutivo logró perdurar hasta mediados de los 70, aunque, como señala Pablo Gerchunoff, fue agotándose en la medida en que también lo hicieron sus fuentes de financiamiento, provenientes de las rentas de la actividad agropecuaria, los superávits previsionales y la inflación.

2\ Ver Portantiero, J.C. (1977).

RÉGIMEN DEMOCRÁTICO Y DECLINACIÓN SOCIOECONÓMICA

Bajo esas condiciones imperantes, cuando el régimen democrático logró constituirse su legitimidad política no fue suficiente para lograr acuerdos básicos sobre las características de la sociedad a construir y sobre el modelo de desarrollo económico que debería sustentarlo.

Desde entonces, la economía y la sociedad exhibieron una tendencia declinante, impulsada por sucesivas crisis económico-financieras de gran intensidad. La involución fue en última instancia resultado de la incapacidad de completar la legitimidad política con la social. Por eso, aunque a partir de 1983 todos los gobiernos tuvieron legitimidad de origen, ninguno pudo mostrar legitimidad de resultados al concluir su mandato.³

Así, la ilusión de que alcanzar la democracia significaría al mismo tiempo desarrollo económico con equidad se transformó, con el correr de los años, en desencanto. «Con la democracia se come, se cura y se educa» profetizó Alfonsín. Hoy sabemos que esa profecía resultó equivocada.

El período de «la gran moderación» en la economía mundial, iniciado en los '80, alentó esperanzas de que hubiese una relación de causalidad entre democracia y desarrollo económico. Dado que ambos coexistían en los países de altos ingresos, la democracia ¿no podría ser la panacea que necesitaban los países de ingresos medios y bajos? En los años 90 los organismos multilaterales, en particular el Banco Mundial, abrazaron esa idea. Sin embargo, hoy parece evidente que la relación entre democracia y desarrollo es mucho más compleja, incluso en las economías avanzadas.

3\ Esas diferencias también se remarcan en el artículo de Botana arriba citado.

La crisis financiera de 2008 y el desmembramiento de la economía globalizada a partir de la pandemia configuraron una «nueva normalidad» mucho más inestable y de menor crecimiento que la del período precedente a escala mundial. La situación se caracteriza por el cuestionamiento de la globalización, por el malestar sobre sus resultados económicos y por el deterioro de la «calidad» de las democracias más allá de la vigencia de procedimientos democráticos en la elección de autoridades. Si esto es cierto, será preciso enfatizar que las posturas en favor de la democracia deben apoyarse en sus bondades *per se*, no en sus supuestas ventajas económicas.

La Argentina es un buen ejemplo de que democracia no implica desarrollo. Su tradicional volatilidad política y económica, la «miopía» de sus actores sociales —cuyas decisiones carecen de una perspectiva de largo plazo— y el agudo conflicto distributivo son tres factores de larga data, independientes del régimen político prevaleciente. En alguna medida esto nos hizo precursores de conductas que hoy parecen extenderse en muchas regiones del mundo.

Los tres fenómenos mencionados (volatilidad, cortoplacismo y conflictividad) subsisten en el presente y siguen impidiéndonos lograr una estabilidad macroeconómica duradera. También continúan bloqueando las transformaciones estructurales e institucionales necesarias para el desarrollo sostenible, perpetuando el movimiento pendular que nos hace oscilar entre los extremos del aislamiento frente al resto del mundo y la apertura irrestricta hacia el exterior, ambos igualmente nocivos e insostenibles.

De hecho, a partir de la crisis del modelo agroexportador, las expansiones en apariencia más prolongadas (primer peronismo, la década de los 60, el período menemista y el kirchnerista) desaprovecharon condiciones externas muy favorables (de términos de intercambio y/o acceso a los mercados financieros internacionales) y, en lugar de

transformar las expansiones en desarrollo sostenible, llevaron adelante políticas económicas inconsistentes y carentes de una perspectiva de largo plazo.

Esas políticas acarrearón déficits fiscales crecientes y severos desajustes de precios relativos (principalmente el «atraso» del tipo de cambio y las tarifas públicas) que en consecuencia foguearon el consumo público y privado a costa de la inversión, descapitalizando la economía. Además, desde mediados de los '70 la captura política del Estado por diferentes grupos de interés y el persistente empeoramiento de la calidad de su burocracia contribuyeron al progresivo deterioro en la cobertura y la calidad de los servicios públicos y las prestaciones sociales.

LOS CICLOS CRASH AND GO

La volatilidad macroeconómica de la Argentina —reflejada en fuertes fluctuaciones de la tasa de crecimiento, los precios relativos y el nivel de actividad— se acentuó de modo sustancial a partir de mediados de los años 70. Pero además, desde entonces la trayectoria de nuestra economía evidenció ciclos de expansión y contracción más prolongados que en el pasado.

El primero se extiende desde el rodrigazo de 1975 hasta el colapso del régimen militar y la crisis de la deuda de 1982. El segundo va desde el inicio del gobierno de Alfonsín en 1983 hasta los episodios hiperinflacionarios de 1989–90. El tercero se inicia en 1991 con la adopción del régimen de convertibilidad que pone fin a la hiperinflación y llega hasta su abandono y el default de la deuda en 2002. El cuarto se extiende desde entonces hasta el fin del «superciclo» de las *commodities* en 2010. El actual, finalmente, iniciado en 2011 con el segundo gobierno de Cristina Kirchner ya transita una crisis en «cámara lenta» que amenaza agudizarse en

cualquier momento (antes o poco después de las elecciones presidenciales de 2023), con el país sumergido en un proceso de alta inflación, agotamiento de reservas internacionales, déficit fiscal desbordado, recesión, informalidad y fuerte aumento de la pobreza.

Estos ciclos, a diferencia de los anteriores ciclos *stop and go*, tuvieron una dinámica del tipo *crash and go*, que comenzó y finalizó con severas crisis económico-financieras. Su duración y secuencia tienen una llamativa semejanza. Diferentes contextos externos, disímiles visiones sobre el rol del Estado en la economía, esquemas divergentes de política económica, nada de eso logró alterar el comportamiento de la economía en el mediano plazo.

Desde mediados de la década del 50, con el ocaso del primer peronismo, el accionar del Estado había tendido a perder autonomía al compás de los conflictos distributivos. La orientación de sus políticas económicas y sociales estuvo cada vez más influida por las presiones contrapuestas de las corporaciones más poderosas. La extrema inestabilidad de la vida política y económica del país tendió a acortar los horizontes de decisión de los actores sociales y explica también sus estrategias de organización y acción, reticentes a la negociación y a la conformación de alianzas amplias basadas en coincidencias sobre objetivos de largo plazo. Progresivamente, la conflictividad saturó la capacidad de procesamiento y respuesta del Estado, consolidando su orientación hacia regímenes de política caracterizados por su miopía.

La debilidad del sistema político-institucional y el predominio de las conductas cortoplacistas, especialmente desde mediados de los años 70, contribuyeron a debilitar las capacidades estatales. La ausencia de una burocracia estable y la falta de coordinación entre diferentes agencias gubernamentales llevaron a la superposición de múltiples conjuntos de reglas dispersas, muchas veces contradictorias,

sin una jerarquía normativa capaz de resolver situaciones de ambigüedad, tensión o conflicto. La incoherencia y variabilidad de esas normas acentuó los incentivos para que en cada coyuntura los diferentes actores reformulasen sus estrategias conforme a sus intereses particulares, sin apegarse a las normas establecidas, que carecían de respaldo sancionatorio.

EL NUEVO EMPATE, LA FRAGMENTACIÓN SOCIAL Y LAS PANACEAS SIMPLISTAS

Durante las décadas del modelo sustitutivo, como ya se señaló, el empate entre las dos corporaciones hegemónicas (empresaria y sindical) logró mantener un crecimiento económico aceptable en una sociedad relativamente homogénea, donde el ascenso social se percibía como posible pese a todos los vaivenes políticos y económicos.

Cuando en la primera mitad de los '70 ese modelo se agotó, comenzó a gestarse una sociedad cada vez más fragmentada. En ella conviven al menos tres realidades. Una de quienes lograron integrarse sin mayores problemas al mundo globalizado, acumulan la mayor parte de sus activos en el exterior y tienen la opción de desvincularse del resto. Otra constituida por sectores medios dependientes del mercado interno y protegidas por el Estado, obligados a respetar las reglas de juego y mantenerse leales al sistema pese a su creciente descontento. La tercera, por último, abarca una amplia franja de la población prácticamente excluida del sistema, a la que fueron sumándose sectores empobrecidos provenientes de las capas medias, cuya única opción para hacerse escuchar y recibir una mínima asistencia del Estado es ocupar la calle.⁴

4\ Esta caracterización está inspirada en Hirschman (1970).

La declinación económica y social que la Argentina experimenta desde entonces obedece a un empate distinto del establecido en el período de la sustitución de importaciones. Este nuevo empate, que abarca múltiples actores sociales diferentes, incluidas las organizaciones sociales representativas de los excluidos, ha conseguido bloquear cualquier intento de transformación del marco institucional y la estructura productiva que amenacen el *status quo*.

En este marco, los dilemas y desafíos planteados a lo largo del último medio siglo fueron abordados sin reconocer su complejidad, recurriendo a «panaceas» simplistas. Estas pretendieron resolver los conflictos sociales suponiendo que obedecían a causas únicas y proponiendo, por ende, recetas facilistas para su solución. Claro está, todas ellas fracasaron.

La panacea autoritaria de la última dictadura militar pretendió gestar una revolución capitalista «desde arriba», disciplinando la sociedad con la «fuerza de la espada». La panacea democrática del alfonsinismo descansó en la ilusión de que la mera vigencia de la soberanía popular expresada en el voto disolvería los dilemas económico–sociales, apoyándose meramente en la recuperación del Estado de derecho y los ideales republicanos. La panacea neoliberal–populista del menemismo apostó a eliminar las trabas y distorsiones que impedían el desarrollo combinando la «magia del mercado», vía apertura y desestatización a ultranza, con políticas sociales clientelares.

Ya en este siglo la panacea kirchnerista, desde una óptica populista de izquierda, imaginó que la movilización estatista y el activismo cesarista removerían los obstáculos del pasado histórico y los problemas acumulados a lo largo de los fracasos previos: funcionó mientras la sostuvo el boom de las *commodities*, pero durante el segundo mandato de Cristina sus resultados no se mantuvieron. El gobierno de Macri intentó sin éxito aplicar la panacea neoliberal sin

aditamentos populistas (al menos en el plano de la retórica), en un contexto doméstico y externo que por cierto bien fue diferente del de la década de los '90. Por último, Alberto Fernández, que cuando se escriben estas líneas está a menos de seis meses de concluir su mandato, procuró replicar la panacea kirchnerista, pero obtuvo resultados mucho peores que los de la familia Kirchner, no solo por el viento en contra de la pandemia y el escenario internacional adverso, sino también por el boicot de Cristina, su vicepresidenta (que conservaba todo su poder dentro de la coalición gobernante).

LOS DESAFÍOS A FUTURO

Mirando hacia adelante, una estrategia de estabilización y desarrollo sostenible e inclusivo debe reconocer la complejidad de los desafíos a enfrentar. Entre los principales, parece crucial destacar los tres siguientes (sin sugerir ningún orden de importancia entre ellos): el desafío de reformar el Estado, el de construir un régimen monetario y financiero estable y prodesarrollo y el de llevar adelante una estrategia coherente de inserción internacional.

El actual funcionamiento del Estado representa un impedimento central para la estabilización y el desarrollo sostenible e inclusivo. Dejando suficiente espacio para la iniciativa privada, el Estado es de todas formas parte indispensable de cualquier estrategia viable. Para que contribuya al desarrollo habrá que construir un Estado renovado, tanto en el plano nacional como provincial, a partir del que está en escombros. Hoy el Estado no solo está desarticulado, sino que es a la vez el eje de una trama de «complicidades estructurales» con actores corporativos que actúan dentro y fuera de la ley. Para que su reforma sea factible, ese eje deberá desmantelarse progresivamente.

La crisis del Estado tiene también una dimensión fiscal, manifestada en la persistencia de abultados déficits presupuestarios. Estos son resultado, por un lado, de un gasto corriente que no deja espacio para la inversión pública aunque absorbe una porción cada vez mayor del PIB y, por el otro, de una presión tributaria que no logra acompañar el aumento del gasto, a pesar de apropiarse de una parte cada vez mayor de los ingresos del sector privado (especialmente de los sectores más humildes, debido a sus características regresivas).⁵

Los desequilibrios fiscales deben financiarse con emisión monetaria o con deuda pública. La primera genera dominancia fiscal: el Banco Central (BC) pierde autonomía para regular la oferta monetaria, que se subordina a las necesidades del Tesoro. En este caso el aumento de la demanda nominal se vuelca a la compra de bienes y de dólares, superando la capacidad de respuesta de la oferta en ambos mercados. La consecuente reducción de las reservas internacionales del BC, a su vez, genera expectativas de devaluación y exacerba el conflicto distributivo (por sus previsibles efectos sobre el salario real). Por todos esos canales (la presión directa sobre precios y sus efectos sobre las expectativas cambiarias y sobre el conflicto) afecta el proceso inflacionario, que se vuelve crónico primero y se transforma en régimen de alta inflación a partir del rodrigazo, alcanzando incluso picos hiperinflacionarios a fines de los ochenta e inicios de los '90. Ese régimen solo fue contenido, apenas temporariamente, por la convertibilidad.

5\ De hecho la presión impositiva es la más alta desde que existen estadísticas oficiales (1932) y es una de las dos más elevadas de América Latina, siendo la otra la brasileña.

La emisión de deuda tiende a reemplazar a la emisión cuando el Estado puede acceder a los mercados financieros internacionales. Pero esas oportunidades no se emplean como puente para equilibrar gradualmente el presupuesto, sino que se aprovechan para mantener elevado el gasto público corriente y extender la fase expansiva del ciclo. En algún momento los acreedores perciben que la deuda excede la capacidad de pago, el riesgo-país aumenta y el ingreso de capitales (no solo de los inversores externos sino también de los ahorristas domésticos) se revierte repentinamente, agotando las reservas del Banco Central y precipitando la crisis financiera y cambiaria que desencadena la caída abrupta de la actividad y el empleo.

El bajísimo grado de monetización y profundización financiera es otro rasgo central de la Argentina emparentado, como lo acabamos de ver, con sus crónicos desequilibrios fiscales. Esos bajos niveles de monetización e intermediación financiera están de manera indisoluble ligados no solo a la marcada volatilidad económica real (crisis y booms recurrentes de la actividad) y nominal (episodios de explosión de precios), sino también a las marcadas fluctuaciones entre las políticas financieras de represión y liberalización. La pérdida de credibilidad ha tendido a debilitar la moneda nacional, estableciendo *de facto* un sistema bimonetario. En él los activos dolarizados no solo operan como la principal reserva de valor, sino que la divisa norteamericana tiende paulatinamente a reemplazar al peso como unidad de cuenta y medio de cambio (en especial en mercados como el inmobiliario o automotriz). Esto limita la soberanía del país, en especial sobre la circulación monetaria y las tasas de interés.

El tercer rasgo de nuestra sociedad que impide revertir el proceso de declinación, en estrecha interacción con los otros dos comentados más arriba, es la ausencia de una estrategia coherente de inserción internacional. Nuestras relaciones

con el exterior se mueven al compás de acuerdos políticos más o menos circunstanciales y, en lo estrictamente comercial, dependen de las fluctuaciones del tipo de cambio y los salarios reales. Es por eso que los períodos expansivos están asociados al aprovechamiento de mejoras transitorias en los términos de intercambio o en el acceso a mercados, que luego tienden a evaporarse.

Si bien es cierto que durante la dictadura de 1976 y, en mayor medida, a lo largo del período menemista se implementaron políticas de liberalización externa y negociaciones internacionales más o menos ambiciosas, la estrategia seguida enfatizó el componente de apertura importadora financiada con endeudamiento externo, factible por las inéditas oportunidades de acceso a los mercados internacionales. Esta estrategia se desentendió del fortalecimiento del perfil exportador del país y acabó colapsando cuando el cierre de los mercados financieros hizo reaparecer la escasez de divisas. Más recientes, las tentativas aperturistas del gobierno de Macri tampoco lograron superar el plano de la retórica.

Entre otras cosas, la ausencia de una estrategia coherente de inserción internacional incidió desde la posguerra en la economía argentina, en particular su industria manufacturera, orientándola casi exclusivamente hacia el mercado interno o regional, que opera bajo condiciones de escasa competencia internacional y, por lo tanto, no ofrece premios ni castigos que fuercen a la modernización y el aumento de la productividad. Los dos ensayos de liberalización importadora *cum* endeudamiento externo acabaron reforzando esos rasgos negativos, al facilitar el acceso al mercado interno de importaciones sustitutivas de producción local, sin crear los incentivos necesarios para que nuestra economía pudiera diversificar exportaciones o competir adecuadamente con las importaciones en el mercado interno.

REFLEXIONES FINALES

Desde 1930 y hasta mediados de los '70, la evolución política-institucional no necesariamente coincidió con la evolución socioeconómica. Las tentativas de democratización siempre se frustraron, sea por fraudes, sea por golpes, autoritarismos o proscripciones; pero a pesar de las crisis económicas, la pobreza nunca alcanzó niveles alarmantes, la movilidad social ascendente se mantuvo y las clases medias crecieron y se consolidaron.

La involución socioeconómica, que comenzó a manifestarse cada vez con más fuerza desde mediados de los '70, no pudo revertirse durante el periodo que se instauró en 1983. El régimen democrático ha tenido que gobernar una sociedad que pasó de ser homogénea a estar muy fragmentada. Durante ese proceso las clases medias se fueron achicando, amplios sectores dejaron de satisfacer sus necesidades básicas y la pobreza creció exponencialmente. En la actualidad ya está consolidada una estructura social en la que un sector de altos ingresos, integrado al mundo globalizado, coexiste con lo que queda de la clase media, que para subsistir precisa del mercado interno y la protección del Estado, y con una extendida franja de la sociedad que quedó prácticamente excluida del sistema.

La salida (*exit*) es el arma de los globalizados; la lealtad al Estado (*loyalty*) que las protege es la de las corporaciones empresariales y sindicales que dependen del mercado interno; las demandas que resuenan en las calles (*voice*) es la de los excluidos. El empate entre esa multiplicidad de actores es lo que bloquea cualquier tentativa de alterar el *status quo* para revertir la tendencia declinante de la economía y la sociedad.

Las transiciones recientes, incluso entre gobiernos peronistas y no-peronistas, revela una marcada continuidad en

muchos aspectos en el funcionamiento político y socioeconómico del país, cuyo análisis excede el propósito de este artículo. Esa continuidad pone de manifiesto el carácter estructural de las limitaciones de un sistema político basado en los enfrentamientos facciosos y un sistema económico sustentado en el capitalismo de amigos.

Si queremos poner fin a la espiral descendente por la que se desliza la Argentina para comenzar a transitar un sendero de desarrollo sostenible hará falta reconocer, en primer lugar, que los problemas no son estrictamente económicos ni se solucionarán apenas con «buenas» políticas económicas capaces de lograr la administración eficiente de recursos inevitablemente escasos. Los desafíos, como señalaron quienes fueron los precursores de la ciencia económica —Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx entre otros—, son en primer lugar cuestiones de economía política.

Si, como debería estar demás aclararlo, pretendemos hacerlo bajo condiciones democráticas, deberemos reconocer, en segundo lugar, que lo prioritario es atenuar la fragmentación social y canalizar constructivamente la conflictividad distributiva. Para ello es preciso elaborar, en un debate lo más amplio posible, una estrategia de estabilización y desarrollo económico consistente e identificar las transformaciones institucionales que la hagan posible, tanto en el plano político como en el del régimen de política económica. Solo por esa vía se podrá alcanzar una estabilidad macro duradera, capaz de combinarse con la implementación simultánea de las iniciativas pensadas para madurar en el largo plazo.

Ni las transformaciones económicas ni las institucionales se lograrán persiguiendo un ilusorio consenso generalizado de todos los actores políticos económicos y sociales. Será necesario, no obstante, identificar un abanico lo más amplio posible de actores interesados en esas

transformaciones, encontrar incentivos para que esos actores alcancen acuerdos duraderos sobre sus características deseables, neutralizar las resistencias de los actores opuestos a esas transformaciones, graduar la velocidad de los cambios y ordenarlos en secuencia para hacerlos factibles y así compensar adecuadamente a los perdedores.

Solo una adecuada combinación de liderazgo político y pericia técnica podrá llevar adelante semejante tarea.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

PORTANTIERO, JUAN CARLOS (1977). Economía y política en la crisis argentina: 1958–1973. *Revista Mexicana de Sociología*.

HIRSCHMAN, ALBERT (1970). *Exit, Voice and Loyalty*, Harvard University Press.